



ROA SARMIENTO ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.

CESANTIAS - SANCION MORATORIA DEFINITIVAS
9 - 2- 227- 5.498 Código: 50-246247.

ART. 162 Código de Procedimiento Administrativo Y de lo Contencioso Administrativo

162 C.P.A. y de lo C.A. DESIGNACIÓN DEL JUZGADO COMPETENTE A QUIEN SE DIRIGE.

**JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI (REPARTO)
REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIAMIENTO DEL DERECHO**

162 C.P.A. y de lo C.A. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES.
Numeral 1º

Parte Demandante

Nombre : ADIELA URIBE MARTINEZ.
Identificación : C.C. No. 24.305.047.
Domicilio : SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA).
Sociedad : ROA SARMIENTO ABOGADOS ASOCIADOS SAS.
Representante Legal : ANGELA PATRICIA RODRIGUEZ VILLARREAL.
NIT : 900265429-8.
Apoderado Judicial : LINA MARCELA TOLEDO JIMENEZ.
Identificación : C.C. No. 1.118.256.564.
Domicilio : SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA).

Parte Demandada

Entidad : LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO.
Representado por : MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Nombre : Dra. GINA PARODY D'ECHEONA, o quien haga sus veces.
Domicilio : Bogotá D.C. (Cundinamarca).
Entidad : FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO-SECCIONAL CALI
Representante : DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO
Nombre : JOAQUIN PRIETO GARCIA, o quien haga sus veces
Domicilio : BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
Entidad : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Representante : GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO
Nombre : Dra. DILIAN FRANCISCA TORO o quien haga sus veces
Domicilio : SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
Entidad : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
Representante : SECRETARIO DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
Nombre : Dr. BERNARDO SANCHEZ SOTO o quien haga sus veces
Domicilio : SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)

Interviniente

Nombre : Agente del Ministerio Publico.
Representante : Procurador Judicial para Asuntos Administrativos
Domicilio : SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA).
Nombre : Agencia Nacional de Defensa Jurídica
Representante : Procurador Delegado para Asuntos
Administrativos.

162 C. de P. A. y de lo C.A. PRETENSIONES.
 Numeral 2º

163 C. de P. A. y de lo C.A. DECLARACIONES

1. **Declarar la nulidad** de la **Resolución No. 03680 del 28 de octubre de 2016**, notificada el 08 de Noviembre de 2016, suscrita por el SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, mediante la cual se atiende en forma desfavorable la solicitud presentada para el reconocimiento, liquidación y pago de la **SANCION MORATORIA** establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

163 C. de P. A. y de lo C.A. CONDENAS

Como consecuencia de la declaración anterior y a título de **RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**:

1. **CONDENAR a LA NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE EDUCACION DEL VALLE DEL CAUCA Y DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, a reconocer, liquidar y pagar a favor de mi poderdante, la **SANCION MORATORIA** establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido por cesantías en la **Resolución No. 1357 DEL 06 DE MARZO DE 2014**, entre **13 de AGOSTO de 2013** hasta el **25 DE JUNIO DE 2014**.
2. Condenar a la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar la indexación de la suma solicitada en el numeral anterior, desde la fecha de pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción moratoria.
3. Condenar a la demandada a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora, sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. Condenar a la entidad demandada a que de estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo dispone el artículo 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5. Condenar en costas a la demandada tal y como lo dispone el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La anterior petición tiene como fundamento:

162 C. de P. A. y de lo C. A. HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
 Numeral 3º

1. Mi poderdante **ADIELA URIBE MARTINEZ**, el día **10 DE MAYO DE 2013** bajo el número de radicación **2013CES016049**, solicitó el reconocimiento y pago de la **CESANTIA DEFINITIVA** a que legalmente tiene derecho.
2. **LA NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE EDUCACION DEL VALLE DEL CAUCA Y DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** a través de la **Resolución No. 1357 DEL 06 DE MARZO DE 2014**, reconoce y ordena el pago de la prestación solicitada.
3. El anterior acto administrativo fue debidamente notificado el día **18 DE MARZO DE 2014**, se encuentra ejecutoriado; generando una obligación clara, expresa y exigible.
4. El día **25 DE JUNIO DE 2014** se procedió al pago del capital reconocido como **CESANTIA DEFINITIVA** por el valor de **\$9.437.518**.
5. El artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 establece: **Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que**

tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

6. El artículo 5 de la misma norma preceptúa: **Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.**
7. Quiere decir entonces que la Entidad demandada debía haber resuelto la petición el día **27 de mayo de 2013** y haberla cancelado el día **12 de Agosto de 2013**.
8. En consecuencia a partir del **13 de Agosto de 2013** hasta el **25 DE JUNIO DE 2014**, se generó la sanción moratoria de que trata la Ley No. 1071 de 2006, que debe cancelarse a mi mandante a razón de un día de salario por cada día de mora.
9. Mi poderdante, se encuentra inscrito en el grado de escalafón **14**.

162 C. de P. A. y de lo C.A.
Numeral 4º

FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política, artículos 25 y 53; Ley 244 artículos 1 y 2 parágrafo, subrogados por los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006.

"ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado....."

Los actos demandados violan la Constitución, por cuanto desconocían que el trabajador tenía el derecho de rango constitucional, de recibir el pago oportuno de las cesantías.

En este caso es el fruto del trabajo de una persona que ha ahorrado sus cesantías, para poderlas invertir en aquello que esta autorizado o para cuando se retire tener un ahorro que le permita subsistir: sin embargo en este caso la entidad demandada vulnera este derecho fundamental pues simplemente a pesar de haber realizado la petición de sus cesantías a tiempo se tomo el tiempo que quiso sin tener en cuenta las necesidades de mi representado debiendo por ello asumir en este caso las consecuencias de su negligencia y no seguir trasladando al administrado su culpa.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció:

"Artículo 23. 1. Toda persona....3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social..."

En este caso debe aplicarse este principio universal en el sentido de que la remuneración al trabajo de años debe ser equitativa al tiempo dedicado al estado y tal y como lo establece la declaración **debe ser completada en caso de ser necesario**, es decir si el estado paga tarde debe asumir el pago de los emolumentos que se causen por la demora en el pago, pues por lo menos debe actualizar las sumas que en su momento debió recibir el trabajador por los años de trabajo.

ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

Es decir el reconocimiento oportuno de las cesantías y de la mora, es consustancial al estado social de derecho. Es inconcebible que, bajo los principios y preceptos superiores, el pago tardío de las cesantías no genere sanción moratoria alguna; y a la vez, injustificable que el trabajador deba soportar los perjuicios ocasionados por la mora, así como la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.

Se vulnera igualmente la ley la ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de Julio de 2006, en virtud de las cuales se ha regulado el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, estableciendo sanciones y fijando términos para su cancelación así:

En el artículo 4 se determinó que "Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley."

ARTICULO 5º MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARAGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestra que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este."

Por su parte tenemos al Honorable Consejo de Estado, Corporación que analiza la aplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y en los eventos en que la administración no se pronuncie o se pronuncie tardíamente frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía, dicha situación, no la exime de la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retraso. En este sentido se ha pronunciado la Sección Segunda de esa Corporación estableciendo el momento a partir del cual se configura la sanción moratoria:

"La Sala ha venido expresando que para lograr la efectividad de la previsión normativa contemplada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 el momento a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas en los eventos en que no exista acto de reconocimiento debe contabilizarse en la siguiente forma:

Se toma la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas con los anexos que corresponda. Desde esa fecha deben computarse, conforme a los términos a los que alude la Ley 244 de 1995, quince (15) días hábiles para "expedir la Resolución correspondiente" de liquidación de las cesantías definitivas, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha en la cual haya quedado en firme dicha resolución, para efectuar el pago de la prestación social. Esto implica que deben contabilizarse en total sesenta (60) días hábiles a partir de la petición, más el término de ejecutoria de la resolución correspondiente, que ordinariamente corresponde a cinco (5) días hábiles, para un gran total de sesenta y cinco (65) días hábiles.

En conclusión, cuando la entidad no se pronuncie frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, el término para el cálculo de la indemnización moratoria comenzará a computarse a partir del día siguiente a los sesenta y cinco (65) días hábiles posteriores a la radicación de la petición de cesantías...".

Respecto al tema bajo estudio, tenemos la postura adoptada por el Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, en donde ha precisado que resulta viable el cobro de la sanción moratoria de que trata los artículos 1º y 2º de la Ley 244 de 1995, subrogados por los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006, a través de la vía de nulidad y restablecimiento del derecho.

En la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 27 de marzo de 2007, también se señaló:

El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 27 de marzo de 2007, expediente No. 2777-2004, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, se ocupó del tema, así:

"(...) 5.3. Formulación de las distintas hipótesis para el reconocimiento de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas.

(...)

Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la petición del interesado, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto, así:

5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías.

5.3.2 La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga.

5.3.3. La administración efectúa el reconocimiento de las cesantías.

En este caso pueden ocurrir varias posibilidades:

5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga.

5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente.

5.3.3.3. Las reconoce extemporáneamente y no las paga.

5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente.

5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido.

En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la suma adeudada es una acreencia laboral.

En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago mediante la acción ejecutiva. V.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2. (...)

En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos procede la ejecución del título complejo. (...)

En conclusión:

(i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

(ii) Ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la vía judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que respecta a la sanción moratoria deberá demostrarse, además, que no se ha pagado o que se pagó en forma tardía.

(iii) El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva.

(iv) Cuando se suscite discusión sobre algunos de los elementos que conforman el título ejecutivo, como que no sean claros, expresos y exigibles, debe acudirse ante esta jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación puede ser ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción pertinente.

Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho. (...)” (Se resalta)

Así las cosas, la vía judicial adecuada para reclamar el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva y la sanción moratoria consagrada en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, es la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, dado que no existe título ejecutivo.

Con esta acción, tal como lo ha sostenido la Jurisprudencia, se busca la protección de un interés particular, con la finalidad de obtener el resarcimiento de un perjuicio causado con el acto cuya nulidad se pretende, es decir, que se encuentra legitimado para instaurar esta acción toda persona a quien se le vulnere un derecho protegido por el ordenamiento jurídico a través de un acto administrativo que afecte un derecho en particular.

“...Conforme al texto de la Ley 244 de 1995, se presentan varias hipótesis, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto, respecto de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas: a) La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías. b) La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga. c) La administración efectúa el reconocimiento de las cesantías. En este caso pueden ocurrir varias posibilidades: c.1) Las reconoce oportunamente pero no las paga. c.2) Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente. c.3) Las reconoce extemporáneamente y no las paga. c.4) Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente. d) Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido. La vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción **moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho**, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, en estos eventos procede la ejecución del título complejo. Ahora, la acción de grupo no es la vía idónea para reclamar la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas toda vez que su finalidad es indemnizatoria. En conclusión: 1) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho...”.

Se trata entonces, de que por vía judicial se conceptúe sobre la legalidad del acto administrativo que negó el reconocimiento del pago de una sanción moratoria originada en el pago tardío de esa prestación a mi mandante.

“...Para una mejor comprensión conceptual de lo aquí señalado y en aras de establecer que no es el proceso de cobro el escenario indicado para obtener el reconocimiento y pago de la sanción reclamada por el demandante, habrá de traerse a colación lo considerado por el Consejo de Estado, al momento de conocer de un proceso judicial fundado en similares pretensiones a las consignadas en la demanda que dio inicio al presente trámite veamos:

“...(...) en los casos en que se discuta la viabilidad del reconocimiento de la indemnización moratoria por pago tardío de cesantías, la acción adecuada es la de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del C.C.A...”

...

La reclamación judicial de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, consagrada en la Ley 244 de 1995, es viable adelantarla ante la jurisdicción contencioso administrativo por vía

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que ella permite no sólo obtener la nulidad del acto sino la reparación de los perjuicios por él ocasionados.”¹

En este caso la parte demandada vulnera entonces la ley 1071 de 2006 por cuanto:

1. Mi representado radicó su solicitud de cesantías el **10 DE MAYO DE 2013**.
2. La misma se resolvió mediante **Resolución No. 1357 DEL 06 DE MARZO DE 2014**, es decir después de los 15 días otorgados por la ley. El pago de las cesantías ocurrió el día **25 DE JUNIO DE 2014**, es decir después de más de los 45 días hábiles establecidos en la norma, contados a partir de que dicho acto administrativo haya quedado en firme.
3. De acuerdo a la ley los términos se reducen a un gran total de sesenta y cinco (65) días hábiles incluidos el término de ejecutoria del acto.
4. Quiere decir entonces que la Entidad demandada debía haber resuelto la petición el día **27 de mayo de 2013** y haberla cancelado el día **12 de Agosto de 2013**.
5. Sin embargo el pago ocurrió hasta el día **25 DE JUNIO DE 2014**, en consecuencia a partir del **13 de Agosto de 2013** hasta el **25 DE JUNIO DE 2014**, se generó la sanción moratoria de que trata la Ley No. 1071 de 2006, que debe cancelarse a mi mandante a razón de un día de salario por cada día de mora.

TRAMITE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

Contencioso establecido en el Título V, Capítulo I artículos 159 y subsiguientes, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, Sírvese Señor Juez imprimir a la presente acción el trámite indicado en el Título V del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el proceso contencioso.

En virtud al domicilio de las partes y la naturaleza del acto atacado, es competente el Juzgado Administrativo.

162 C. de P. A. y de lo C.A. PRUEBAS QUE HAGO VALER
Numeral 5º

De conformidad al numeral 5 del artículo 162 y numeral 2 del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, anexo los siguientes documentos que tengo en mi poder:

Ruego al señor Juez tener y practicar como tales las siguientes:

DOCUMENTAL QUE APORTO

1. Copia simple de la **Resolución No. 1357 DEL 06 DE MARZO DE 2014**, por medio de la cual se ordena el reconocimiento y pago de cesantía definitiva.
2. Copia del Desprendible de pago.
3. Copia del Derecho de Petición.
4. Copia simple de la **Resolución No. 03682 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016**, por medio de niegan el pago de la sanción moratoria.
5. Certificado de salarios de mí representado.
6. Certificado de tiempo de servicios de mí representado.
7. Copia simple de la cedula de ciudadanía.
8. Copia de la resolución de retiro de la docencia.
9. Certificación expedida por la Procuraduría de haberse agotado el requisito de procedibilidad

162 C. de P. A. y de lo C.A. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA
Numeral 6º

De conformidad con los derechos pretendidos, razono la cuantía de la siguiente manera teniendo en cuenta el grado en el escalafón de mi representado ADIELA URIBE DE MARTINEZ, la fecha de pago de las Cesantías y la fecha en que legalmente debería haber cancelado este valor:

¹ Folio 26 c.o. Corte Suprema de Justicia.

Teniendo en cuenta que el pago ha debido hacerse **12 de Agosto de 2013**, y que sólo se canceló hasta **25 DE JUNIO DE 2014** incurriéndose en una mora de 312 días a razón de **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$26.487.468)**, por encontrarse mi representado en grado 14, a razón de **OCHENTA Y CUATRO PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$84.895,73)** diarios.

ANEXO CUADRO LIQUIDACION

166 C. de P. A. y de lo C.A. ANEXOS

1. Copia del Contrato de Mandato otorgado
2. Certificado de Existencia y Representación Legal.
3. Poder conferido por la Representante Legal de la Organización de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de mandato celebrado que establece: CUARTA: FACULTADES DEL MANDATARIO: a) FACULTAD EXPRESA DE APODERAMIENTO: EL MANDANTE faculta expresamente AL MANDATARIO a otorgar, revocar, modificar poderes, para adelantar los trámites administrativos y/o jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato.
4. Los relacionados en el acápite de pruebas.
5. Copia de la demanda para el archivo del Despacho.
6. Copia de la demanda y sus anexos para la entidad demandada.
7. Copia de la demanda y sus anexos para el traslado al señor Procurador delegado ante la Justicia Administrativa.
8. De acuerdo a lo establecido en la Ley 1564 de 2012 artículo 613, copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación.
9. En virtud de lo contemplado en el inciso 5 del artículo 612 de la ley 1564 de 2012, que modificó lo dispuesto en el artículo 199 de la ley 1437 de 2011, copia de la demanda y anexos, para que quede en el despacho de la secretaría a disposición del notificado.
10. Un CD que contiene la solicitud y sus anexos en medio magnético en PDF. (donde lo soliciten)

166 C. P. A y de lo C.A. NOTIFICACIONES PERSONALES A LAS PARTES Y APODERADO. Numeral 11

- ✓ **Parte Demandante:** Cra 4 No 12-41 Centro Ed. Seguros Bolívar Of 1303, Teléfono 8889350-3208303477 de la ciudad de SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA). Email: cali@roasarmientoabogados.com o limatoji87@hotmail.com.
- ✓ **Parte Demandada. A LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA – CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL – CAN – CALLE 43 # 27-14 TELEFONO: 2220206 BOGOTÁ D.C.**
- ✓ **Parte Demandada, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.:** Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de, Teléfono 6200000-6200001 de la ciudad de SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA). correo electrónico: despachogobernador@valledelcauca.gov.co
- ✓ **Apoderado del Demandante.** Cra 4 No 12-41 Centro Ed. Seguros Bolívar Of 1303, Teléfono 8889350-3208303477 de la ciudad de SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA). Email: cali@roasarmientoabogados.com o limatoji87@hotmail.com.
- ✓ **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN**, en la calle 70 Nro. 4-60 de la ciudad de Bogotá, teléfono 2558955, correo electrónico para demandas procesos@defensajuridica.gov.co

Atentamente,

Lina Marcela Toledo Jimenez
LINA MARCELA TOLEDO JIMENEZ.
C.C. No. 1.118.256.564 de VIJES.
T.P. No. 208.789 del C.S. de la J.

L.T.J.